



MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 088

Procedimiento: Verbal (impugnación de actas).

Demandante: Ángela María Serna Londoño.

Demandados: Conjunto Residencial Villa Colombia P.H.

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 006 2022 00026 01.

Procedencia: Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Decisión: Confirma auto apelado.

Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación interpuesto, en subsidio al de reposición, por la demandante contra el auto proferido el 26 de junio de 2023, por medio de la cual se aprobó la liquidación en costas dentro de este proceso por la suma de \$5.800.000.

ANTECEDENTES.

La Sra. Ángela María Serna Londoño como demandante en este juicio fue vencida mediante sentencia dictada en audiencia de juzgamiento del 19 de mayo de 2023. Allí se le condenó a pagar al Conjunto Residencial Villa Colombia P.H., la suma de \$5.800.000 por concepto de agencias en derecho.

Con ocasión a lo anterior, el secretario del Juzgado de origen procedió a liquidar las costas procesales de este proceso arrojando como único valor el reconocido en el párrafo anterior; el cual, fue aprobado en tales términos en proveído del 23 de mayo de 2023.

LA IMPUGNACIÓN.

Oportunamente el actor interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando que la tasación de las costas procesales resultaba desproporcionada *«al no existir causa que hubiese causado gastos, ni razón que los motivaran; hay lugar a ellas cuando en el expediente aparezcan pruebas que demuestren que se causaron»*. Así mismo, precisó que, la suma de \$5.800.000 *«no ameritan tal imposición, ya que el despliegue procesal y probatorio obrante en el expediente, demuestra que existen situaciones especiales que justifiquen los referidos valores: ni la naturaleza del proceso, ni la cuantía, ni la duración (16 meses) somos conocedores tanto las partes como el despacho que se presentaron circunstancias ajenas a la voluntad de la suscrita, para que las actuaciones del trámite se prolongaran en el tiempo como fue la negligencia de la señora Claudia Janet Caro para la entrega de documentos, los autos proferidos por el Despacho, que fueron apelados y revocados por el Superior Jerárquico»*. Finalmente alegó que las costas aprobadas en el denotado monto, constituye *«detrimento patrimonial por ir en defensa de los derechos que nos asisten en calidad de propietarios de áreas privadas del Conjunto Residencial Villa Colombia P.H»*.

El juzgado, al resolver el recurso horizontal, se mantuvo en su decisión por auto del 26 de junio de 2023. Explicó: *«Las agencias en derecho se fijaron en un monto de cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al Acuerdo antes mencionado y con base en las normas del C.G.P. referidas, y que a la fecha de la emisión de la decisión ascienden a la suma de cinco millones ochocientos mil pesos (\$5´800.000,00); es decir que la condena se fijó en un parámetro medio, en relación con los topes mínimo y máximo establecidos para ello en el literal b) del numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, a saber, entre uno (1) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por tratarse de un proceso sin cuantía»*. De igual modo, señaló: *«se reitera, que las agencias en derecho únicamente se fijaron a cargo de la demandante señora Ángela María Serna, y NO en contra de ningún otro copropietario del Conjunto Residencial Villa Colombia P.H., como al parecer lo pretende indicar la recurrente»*. En tal sentido, concluyó: *«el despacho, al momento de emitir la sentencia oral, encontró pertinente no solo la condena en costas a la parte demandante, a cuyas pretensiones no se accedió, sino además la condena en costas a su cargo, con la respectiva fijación de las agencias en derecho que hacen para de las mismas porque en el plenario está*

acreditado que se causaron, en el equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, dadas las gestiones adelantadas por el apoderado judicial de la parte demandada, por la parte demandante, por el nivel de contención del litigio, por la duración del mismo (imputable mayoritariamente a la parte demandante), y por la ausencia de cuantía determinada por la parte demandante, que así lo ameritaban, y atendiendo a las disposiciones legales y administrativas antes referidas». Por ende, concedió la apelación interpuesta en subsidio, otorgándole al recurrente el término de tres (3) días para su sustentación según lo previsto en el artículo 322 numeral 3º del CGP.

La prenota oportunidad fue aprovechada por el apelante para expresar: *«el señor juez a quo, debió tasar la condena en costas a nuestro cargo en un salario mínimo legal mensual, o sea, en \$1.160.000, dado que la actuación de la parte accionada a través de su apoderado judicial fue mínima, pues, prácticamente se limitó a la interposición de la demanda y a la asistencia a la audiencia practicarón de la demanda y a la asistencia a la audiencia en que se practicarón las pruebas y se profirió fallo».* Asimismo, insistió en que su actuar durante este proceso fue diligente, no habiendo de su parte, ninguna conducta dilatoria. Finalmente, indicó: *«Denótese por lo manifiesto en este escrito y que se corrobora con el material existente en el expediente 05001310300620220002600, que la gestión del apoderado de la parte demandada fue NULA, ya que la prueba aportada a la demanda para ser analizada y valorada al momento de proferir el señor juez el fallo, fueron aportadas por la suscrita; no contestó la reforma de la demanda, se le corrió traslado a los recursos y guardó silencio, razón por la cual la fijación de agencias en derecho en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, no corresponde a la realidad procesal. Para finiquitar, no aparece sustentada la razón por la cual el señor juez a quo, pudiendo moverse entre uno (1) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, sin citar las actuaciones del togado que asistió los intereses de la parte demanda, decide adoptar la mitad del quantum, cuando como lo hemos reiterado, las intervenciones de éste no solo fueron pocas, sino que también fueron ineficientes. La sentencia absolutoria no se debió a los argumentos o pruebas presentadas. Si no se interpuso el recurso de apelación de forma técnica, obedeció a mi estado emocional seriamente afectado por la conducta asumida durante la audiencia por el señor juez».*

CONSIDERACIONES.

Este auto resulta susceptible del recurso de apelación conforme lo establece el artículo 366 numeral 5º del CGP.

El artículo 365 numeral 1º ibídem consagra: «*Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso*» y para el efecto, la norma subsiguiente establece dos tipos de valores llamados a reconocerse en dicha condena: las expensas y las agencias en derecho. Este último concepto que, es el que aquí interesa, consiste en los gastos que por defensa judicial se le deben compensar a quien ganó el litigio y para su tasación el numeral 4º del artículo 366 del CGP., dispone:

«Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas».

De la norma transcrita se desprenden dos aspectos de suma relevancia: 1. Las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para tasar las agencias en derecho (Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016) y 2. Los elementos esenciales que el(a) juez debe tener en cuenta al momento de fijarlas entre sus mínimos y máximos, esto es, la naturaleza, calidad, duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que ha actuado en causa propia y las demás circunstancias que se armonicen con las reseñadas. Sobre este último aspecto, conviene señalar que, la participación activa de la parte beneficiada por las agencias en derecho, no constituye la única circunstancia que permite su tasación, en tanto que, para ello, existen otras como la simple gestión de cuidado y vigilancia del proceso que justifican su imposición. Al respecto, se ha expresado:

«En relación con las agencias en derecho, se tuvieron en cuenta "los lineamientos establecidos por la ley para determinar el monto de las mismas, como son la naturaleza, la calidad y el tiempo invertido por la parte beneficiada con la condena. Baste al efecto precisar, al menos, que la duración del trámite del recurso, el que se interpuso desde el 7 de julio de 2009 y se concluyó a través de proveído de 21 de octubre de 2010, lapso durante el cual los contradictores tuvieron que examinar y controlar sus incidencias, las que, tal como lo tiene definido la jurisprudencia de la Sala, auto 252 de 18 de noviembre de 2004, expediente 1219-01 que "la suma señalada en favor del actor por concepto de agencias en derecho, comporta para

él una justa retribución por el lapso de tiempo en que hubo de estar pendiente de los resultados del recurso, labor esta que, itérase, no se manifiesta en actos procesales concretos, pero sí justifica su remuneración (Autos de 19 de agosto de 1993, exp. 4217 [G.J. t. CCXXV, pág. 362], 25 de agosto de 1998, exp. 4724, y 29 de enero y 5 de diciembre de 2002, expedientes 7050-98 y 7538, entre otros)’, esto es, que **se pone de manifiesto de modo no objetable que no solo las intervenciones específicas del abogado sino la simple gestión de cuidado y vigilancia** durante más de un año como acá ocurrió sirve de basamento y apoyo a la remuneración que se ha reconocido (...)” (auto de 26 de noviembre de 2010, exp. 2003-00527, reiterado el 19 de junio de 2012, exp. 2003-03026)» (CSJ, AC233-2021)¹» (resalto del Tribunal).

Expresado lo anterior, conviene traer a colación la tarifa que, mediante Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, se estableció para el asunto que aquí converge (proceso declarativo de impugnación de actas cuyas pretensiones carecen de valor pecuniario):

«ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. (...) En primera instancia. (...) b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.»

En este asunto, la recurrente critica la decisión del *a quo* porque considera desproporcionada la suma de \$5.800.000 que debe pagar a su contraparte por concepto de agencias en derecho. Lo anterior, porque estima que la demandada realizó una precaria participación dentro de este proceso y su gestión no contribuyó a que la sentencia aquí dictada haya salido a su favor. Asimismo, precisó que ayudó a la pronta definición de este litigio pese a ciertas decisiones que en primera instancia se tomaron y que finalmente fueron revocadas por este Tribunal. Pues bien, la suscrita observa de este proceso, lo siguiente:

- Se trata de un proceso declarativo que buscaba la declaratoria de nulidad absoluta de unas actas de asamblea. Por ende, la fijación de agencias en derecho se definió por la naturaleza del asunto.
- El proceso fue promovido el 25 de enero de 2022 y definido mediante sentencia del 19 de mayo de 2023, por lo que su duración fue 1 año y 4 meses aproximadamente.
- La demandada, Conjunto Residencial Villa Colombia P.H., contestó oportunamente la demanda y allí propuso las siguientes excepciones:

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC1628 del 5 de mayo de 2021, Exp: ° 11001-31-03-035-2007-00533-01, MP Dr. Álvaro Fernando García Restrepo.

«Legitimidad de la asamblea, Legitimidad de las decisiones y Validez de la representación en asamblea»

- La demandante reformó la demanda siendo admitida por auto del 12 de octubre de 2022. Sin embargo, la pasiva no la contestó tal como quedó reflejado en proveído del 4 de noviembre de 2022.
- El 26 de abril de 2023, el Conjunto Residencial Villa Colombia P.H., asistió por intermedio de apoderado a la audiencia inicial que trata el artículo 372 del CGP, quien, a su vez, participó y estuvo vigilante en las diferentes etapas que allí se agotaron.
- El 19 de mayo de 2023, el Conjunto Residencial Villa Colombia P.H., a través de su abogado asistió a la audiencia de instrucción y juzgamiento prevista en el artículo 373 ibídem. En tal escenario, el referido abogado, igualmente participó y estuvo vigilante en las diferentes etapas que componen dicha audiencia y dentro de ella se dictó, en lo que aquí interesa, la siguiente decisión: *«Primero: se declaran probadas las excepciones formuladas por la parte demandada en su contestación a la demanda, en contra de las pretensiones de la parte demandante por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. Segundo: Como consecuencia de ello se desestiman las pretensiones de la parte demandante que fueron ajustadas dentro del curso del trámite judicial por no haberse acreditado en el plenario los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para ello, de conformidad con lo anunciado en las motivaciones de esta providencia...»*.

Conforme al anterior recuento, debe concluirse que la alzada está destinada al fracaso. Nótese que la demandada tuvo una participación activa durante el curso de esta causa, pues contestó la demanda y propuso excepciones, las cuales fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia; asistió y participó en cada una de las audiencias programadas en este proceso. Además, mantuvo su deber de vigilancia y cuidado durante 1 año y 4 meses que duró aproximadamente el presente litigio. Por consiguiente, resulta ajustado el monto fijado por el señor juez *a quo* por concepto de agencias en derecho, que en todo caso no sobrepasa el marco establecido en el artículo 5º numeral 1º de los denominados procesos "En primera instancia" del literal b) del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Por último, debe destacarse que, el hecho de que la recurrente haya sido diligente en su actuar, sienta que va a tener un detrimento patrimonial por la condena que deberá pagar, haya controvertido oportunamente decisiones del señor juez *a quo* o se haya sentido vedada de hacerlo frente a otras que aquel tomó por cierta presión ajena a su voluntad, no constituyen factores que interesen al momento de tasar y aprobar una determinada liquidación de costas, que le fue impuesta por ser parte vencida en el proceso (art. 365-1 C.G.P.).

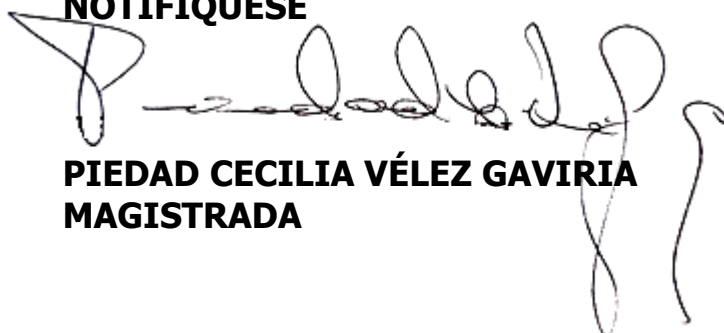
Por todo lo anterior, sin necesidad de ahondar en más consideraciones la suscrita magistrada,

RESUELVE,

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicadas.

SEGUNDO. Devuélvanse las piezas digitales al despacho de origen. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE



**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA**

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fdf27401c36bed8fae908e38af4e0c23d812a4b4a6483e7ebad685c6fa3e269a**

Documento generado en 30/08/2023 01:29:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>